JUZGADO DE 1ª INSTANCIA N° 01 DE ALCOBENDAS

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1691/2021

Materia: Contratos bancarios

Negociado IGS

Demandante: D./Dña.

PROCURADOR D./Dña.

Demandado: CREDITO A DOMICILIO, S.L.

PROCURADOR D./Dña.

SENTENCIA N° 52/2023

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: D./Dña.

En Alcobendas, a 20 de enero de 2023.

Vistos por D. _____, Juez de Refuerzo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcobendas, los presentes autos de juicio ordinario n.º 1691/2021, seguidos por la demanda interpuesta por la Procuradora de los Tribunales D.ª _____

_____, en nombre y representación de D.ª _____

CASTILLO, bajo la dirección del Letrado D. Miguel Ángel Correderas García, dirigida contra la entidad **CREDITO A DOMICILIO, S.L.**, representada procesalmente por la Procuradora de los Tribunales D.ª _____ y defendida por el

Letrado D. _____, sobre nulidad de un contrato de microcrédito, procede dictar la presente resolución, en nombre de S.M. el Rey, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado el conocimiento de la precedente demanda de juicio ordinario presentada en Decanato en fecha 30 de julio de 2021, en la que la parte actora, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó solicitando Sentencia acorde con el suplico de su demanda.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 30 de noviembre de 2021, se ordenó emplazar a la parte demandada, para que en el término de veinte días compareciera en los autos y contestara a la demanda. Personada la parte demandada y formulada en tiempo y forma la contestación a la demanda interesando la desestimación de la misma, se dictó diligencia de ordenación de fecha 12 de enero de 2022, citando a las

partes para la celebración de la Audiencia Previa el día 19 de enero de 2023, en la Sala de Vistas de este Juzgado.

TERCERO.- El día señalado tuvo lugar la Audiencia previa a la que comparecieron las partes con representación procesal y defensa letrada. Abierto el acto, las partes se ratificaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación, se desestimaron las excepciones procesales planteadas, se fijaron los hechos controvertidos y según lo solicitado se recibió el pleito a prueba. Tanto la parte actora como la parte demandada propusieron únicamente prueba documental. Admitida la prueba propuesta y siendo esta la documental obrante en autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429.8 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), se declararon los autos conclusos, sin necesidad de juicio, y vistos para dictar Sentencia.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora pretende con base a la relación contractual que liga a las partes, en concreto por el contrato de microcrédito, que se dicte una Sentencia por la que se declare el contrato suscrito entre las partes nulo de pleno derecho por contener un interés remuneratorio que se considera usurario de acuerdo con la Ley de Represión de la Usura de 23 de Julio de 1908, al fijarse en dichos contratos una TAE que, según sostiene, pese a figurar un 264% TAE, realmente es de un 987,22% TAE con los efectos legales a dicha declaración. Subsidiariamente solicita declaración de nulidad de las cláusulas del contrato en las que se regulan los intereses por tratarse de condiciones generales de contratación de un contrato de adhesión impuestas unilateralmente con falta de transferencia y que generan una situación de desequilibrio entre las partes, teniendo la consideración de cláusulas abusivas y debiendo ser declaradas nulas de pleno derecho con los efectos legales inherentes a esa declaración.

Frente a las pretensiones deducidas en su contra la parte demandada mantiene que se dedica a la concesión de microcréditos vía online en los que constan todas las condiciones con claridad eligiendo el cliente el importe y el plazo de devolución, cumpliendo todos los preceptos de la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a consumidores, tratándose de un mercado en el que no puede servir de referencia el interés bancario, tratándose de productos a corto plazo y escaso importe. Alega la parte demandada, claridad y transparencia e inexistencia de abusividad y de usura. Mantiene la entidad demandada que no se trata de tarjeta revolving ni de un préstamo personal a plazos y que se trata de una pequeña financiera de capital privado que no está

regulada por el Banco de España y que hay que acudir al propio sector privado del micrédito para determinar la “normalidad” de los intereses aplicados.

SEGUNDO.- Para dar respuesta a la controversia que ahora se suscita, y atendiendo al vínculo contractual suscrito entre las partes, puede advertirse cómo nos encontramos ante un contrato de préstamo rápido al consumo a través de una página web, en virtud del cual el consumidor se adhiere a las condiciones ofrecidas por el prestamista, recibe el dinero en su cuenta y se obliga a la devolución en las condiciones que figuran en la página, que vienen a suponer la devolución del importe recibido a cambio de un precio que se configura en el contrato en diferentes conceptos gastos, intereses, comisiones u “honorarios. Estos préstamos de escasa cuantía o micropréstamos son contratos y como tal ha de estarse al artículo 1091 del Código Civil establece que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos; consagrando, así., el principio de *pacta sunt servanda*, íntimamente relacionado con los artículos 1254 y 1258 del mismo Texto Legal, de los que se desprende que, existiendo el contrato desde que una o varias personas consiente en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio, los mismos se perfeccionan por el mero consentimiento, obligando entonces al cumplimiento de lo pactado y, como reconoce la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2003) de todo aquello que según la naturaleza del contrato, sea conforme a la buena fe, al uso y a la Ley. Igualmente, de conformidad con el artículo 1089 del Código Civil, los contratos se erigen en fuente de las obligaciones, no pudiendo dejarse su cumplimiento al arbitrio de uno sólo de los contratantes (artículo 1256 del Código Civil). Finalmente, el artículo 1278 del Código Civil señala que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la forma en la que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. De este precepto resulta que la eficacia de los contratos no depende de sus formas externas, sino de la concurrencia de las condiciones que establece el artículo 1261 del Código Civil. Así lo ha reconocido la jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1983, 10 de marzo de 1999, ó 26 de abril de 1999, 26 de noviembre de 2002, 18 de mayo de 2005, ó 5 de enero de 2012, entre otras) al decir que el principio espiritualista que rige nuestro sistema de contratación no implica la exigencia de forma alguna para la validez de los contratos.

Pero además se trata de productos bancarios suscritos a través del sistema de banca on line por la página web concertada por la entidad demandada. En este sentido debe destacarse con carácter previo que, en la actualidad el comercio electrónico se ha extendido de forma masiva y, más específicamente en el ámbito bancario. De manera que el servicio de banca on line se viene ofreciendo prácticamente por la totalidad de entidades del sector. Es evidente que los clientes de las entidades bancarias, que actúan a través de unos códigos facilitados por las mismas y que, en principio, sólo ellos conocen, pueden realizar muchas operaciones que antes requerían la presencia física del cliente en la oficina y la firma de los documentos correspondientes, que eran los que, cuando surgen las diferencias, permitían a

las entidades de crédito acreditar la existencia de la relación y de su alcance. El artículo 23 ley 34/02 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información admite la validez de los **contratos celebrados mediante procedimientos electrónicos** y en orden a su prueba, el artículo 24 de la misma Ley se remite a las reglas generales del Ordenamiento y concluye que 'En todo caso, el soporte electrónico en que conste un contrato celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental'. Y el artículo 3 de la ley 59/03 dice que 'Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Cada operación que se realiza mediante la clave facilitada por la entidad bancaria al consumidor ha de quedar registrada e individualizada en un soporte electrónico y el mismo es susceptible de prueba, según resulta del artículo 3.8 de la Ley 59/03 'El soporte en que se hallen los datos firmados electrónicamente será admisible como prueba documental en juicio'.

TERCERO.- No siendo controvertida la condición de consumidor de la parte demandante ha de examinarse la naturaleza jurídica que ha de atribuirse a las cláusulas contractuales; y ello porque, como dispone la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 2015, para que las cláusulas de los contratos celebrados con consumidores puedan ser anuladas por abusivas es requisito imprescindible que constituyan condiciones generales de la contratación, esto es, cláusulas contractuales predispuestas, impuestas en tanto que no negociadas, y destinadas a una pluralidad de contratos. O, cuanto menos, que se trate de cláusulas no negociadas, aunque falte el último de los requisitos indicados. Así resulta del artículo 3 de la Directiva 1993/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y de los artículos 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, encuadrados bajo el epígrafe de “cláusulas no negociadas individualmente”.

De conformidad con el artículo 1.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, “Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”. Por tanto, de este precepto se desprende que la condición general de la contratación presenta las siguientes notas características: 1) la contractualidad; 2) la predisposición de la cláusula o redacción de la misma con anterioridad a la fase de negociación y celebración del contrato, con la finalidad de incorporarse a una pluralidad de contratos; y 3) la imposición, ya que la incorporación de las condiciones generales al contrato se realiza por iniciativa exclusiva del predisponente, frente a lo cual, el adherente únicamente puede optar por su aceptación, esto es, contratar sometándose a las condiciones generales preestablecidas, o renunciar al contrato.

El análisis de los requisitos que determinan la naturaleza de las condiciones generales de la contratación ha sido objeto de una abundante jurisprudencia, entre las que merecen destacarse las Sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 ó de 8 de septiembre de 2014, de las cuales pueden extraerse las siguientes consideraciones: Primera.- El hecho de que se refieran al objeto principal del contrato en el que están insertas no es obstáculo para que una cláusula contractual sea calificada como condición general de la contratación, ya que ésta se define por el proceso seguido para su inclusión en el mismo. Segunda.- El conocimiento de una cláusula, sea o no condición general o condición particular, es un requisito previo al consentimiento y es necesario para su incorporación al contrato, ya que, en otro caso, sin perjuicio de otras posibles consecuencias, no obligaría a ninguna de las partes. Tercera.- No excluye la naturaleza de condición general de la contratación el cumplimiento por el empresario de los deberes de información exigidos por la regulación sectorial. Cuarta.- La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que se adhiere y consiente en contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar. Quinta.- No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre una pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación, aunque varias de ellas procedan del mismo empresario. Sexta.- Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios. Y Séptima.- La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en una pluralidad de ofertas de contrato dirigidas por un empresario o profesional a los consumidores, recae en el empresario.

Partiendo de estas consideraciones, las cláusulas que ahora nos ocupan, entre las que se incluye la controvertida, no pueden sino ser calificadas las mismas, como se ha dicho, como condiciones generales de la contratación, desde el momento en que, atendiendo a su redacción, y asumiendo la ausencia de prueba en contrario, las mismas fueron prerredactadas por la entidad demandada. Y esa misma ausencia de prueba por parte de la demandada, en los términos que se acaban de exponer, juntamente con la aludida prerredacción de las mismas lleva a considerar, también, a dichas cláusulas como impuestas, pues no consta acreditado que su incorporación al contrato se haya llevado a cabo previa negociación efectiva entre las partes, de manera que el actor sólo ha tenido la opción de aceptarlas o de renunciar a la contratación.

Al respecto, señala el artículo 1 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo: "por el contrato de crédito al consumo un prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación".

Así el Banco Central Europeo en su boletín Mensual de Octubre de 2017, en concreto en su página 76, define lo que se ha de entender por créditos al consumo, para lo cual afirma lo que sigue: "Crédito al Consumo: Esta categoría representa el 13% del total de préstamos de las IFM a los hogares(en el segundo trimestre del 2007) y comprende los préstamos personales concedidos para fines de financiación de bienes y servicios de consumo, como vehículos de motor, muebles, electrodomésticos y otros bienes de consumo duradero, viajes de vacaciones etc... En el caso del crédito al consumo, la distinción entre finalidad y garantía puede ser mayor que en el caso de los préstamos para adquisición de vivienda, dado que los préstamos para adquisición de bienes y servicios de consumo pueden garantizarse con bienes inmuebles. Generalmente los préstamos mediante tarjeta de crédito y los descubiertos en cuenta corriente se incluyen también en esta categoría"

En este caso, el crédito concedido fue de 300 euros, con una duración de 8 meses. Se establece un interés de demora sobre el préstamo es equivalente al 1,75% diario sobre el importe correspondiente al principal de la cuota mensual impagada, con un máximo 100% del importe del préstamo concedido, por lo que puede incluirse en los denominados microcréditos. Reuniendo las características de ser préstamos de entidades de crédito a consumidores, de pequeñas cantidades, de forma rápido, sin apenas documentación y con plazo de devolución muy corta. Los intereses suelen ser muy elevados y si no se cumple con la devolución en plazo, la cantidad debida por la aplicación de tan altos intereses pueden suponer pagar mucho más que la cantidad debida. En caso de impago, los costes se disparan, cargando comisiones por reclamación de posiciones deudoras e intereses adicionales que hacen que la deuda aumente exponencialmente.

En este caso, La TAE aplicadas fueron: Tipo deudor fijo es de 9%-22% Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 264%.

Siendo cierto, que los intereses remuneratorios forman parte del objeto del contrato, constituye el precio del mismo y por ello resulta ajeno al control de abusividad. Tal y como recuerda la STS de 26 de octubre de 2011 TJUE "la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida... ".Sin embargo, ello no significa que la cláusula cuestionada esté exenta de cualquier tipo de control, puesto que, tal y como recoge la SAP Valencia, Sección Sexta, de 22 de diciembre de 2017, el interés remuneratorio se halla sujeto al control de " la Ley de 23 de julio de 1908, de la Usura (EDL 1908/41), al de transparencia de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (EDL 1998/43305) y al de la legislación de protección de los consumidores que puede armonizarse con la de represión de la usura en el caso de intereses remuneratorios desproporcionados o manifiestamente excesivos, provocadores de un desequilibrio entre las prestaciones comprometidas por las partes ".

El Tribunal Supremo, por medio de la Sentencia nº 628/2015, de fecha 25 de noviembre de 2015, ante una operación crediticia que estaba encuadrada en el ámbito del crédito al consumo al tratarse de un préstamo personal revolving, y por ello, en un supuesto de similar naturaleza al que ahora nos ocupa, aplicó el texto normativo regulador de la usura para concluir que la mencionada operación de crédito litigiosa debía ser considerada como usuraria, en cuanto establecía un interés notablemente superior a la normal del dinero y manifiestamente desproporcionado en relación a las circunstancias del caso tomado como índice de referencia las estadísticas que publica el Banco de España.

Respecto a cuál ha de ser el índice de referencia, la cuestión ha sido resuelta por la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo, núm. 149/2020 de 4 de marzo, en (EDJ 2020/512653) la que de cierto modo se modula la tesis sostenida por la Sentencia de 15 de noviembre de 2015, en orden a clarificar que debe ser tomado como término de comparación para valorar la naturaleza o no usuraria de los intereses remuneratorios pactados (TAE), el tipo medio aplicable a la específica modalidad de crédito de las tarjetas "revolving", y dentro de la categoría más amplia de créditos al consumo como es el caso de los microcréditos es perfectamente aplicable, dado que se trata de contratos de crédito al consumo, y en general la diferencia entre un microcrédito y una tarjeta revolving o línea de crédito revolving es la cantidad prestada, que no suele superar los 1.000 € en el caso de los microcréditos y en las tarjetas revolving puede llegar hasta los 10.000 €.

La Audiencia Provincial de Madrid, se ha pronunciado en la sentencia de 13 de mayo de 2022 (ROJ: SAP M 7429/2022 - ECLI:ES:APM:2022:7429), en un supuesto similar al de los presentes autos, señalando que: " 5.- El Tribunal Supremo, en su sentencia de Pleno núm. 149/2020 de 4 de marzo Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 991ª, 04-03-2020 (rec. 4813/2019), fijó doctrina sobre el término comparativo a tener en cuenta para enjuiciar si el interés controvertido es notoriamente superior al normal del dinero, en los términos que prevé el artículo 1 de la Ley de 23 de julio de 1908, de Represión de la Usura (LRU). Al respecto la jurisprudencia señala que deben utilizarse las categorías más específicas, siempre que éstas existan. Según nos enseña la jurisprudencia, las estadísticas del Banco de España son una fuente adecuada para determinar los tipos medios de mercado con los que efectuar la comparación. Al respecto, la STS núm. 149/2020 de 4 de marzo, Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 991ª, 04-03-2020 (rec. 4813/2019) extractó algunos pronunciamientos de la STS núm. 628/2015 de 25 de noviembre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 991ª, 25-11-2015 (rec. 2341/2013), entre ellos el siguiente: " Para establecer lo que se considera "interés normal" puede acudir a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas". Recurrída, parte de la premisa de que el microcrédito es una categoría crediticia con perfiles propios dentro de la

más general de los créditos al consumo, por lo que toma en consideración la TAE media de este tipo de producto según informe aportado por la Asociación Española de Micropréstamos (AEMIP). Sin embargo, las estadísticas del Banco de España no contemplan el microcrédito como categoría específica. La Sala considera al efecto, que las cuantías y plazos de devolución reducidos no convierten esta modalidad de préstamo al consumo en una categoría diferenciada. El hecho de que se exprese el coste total de la operación en euros, tampoco es un elemento diferenciador, ya que se trata de dato puramente informativo. En fin, la firma de un contrato con cada entrega de dinero es una circunstancia común a los créditos al consumo no revolventes.

Por tanto, esta Juzgadora atendiendo a la jurisprudencia anteriormente señalada, considera adecuado utilizar, como elemento de comparación, el TAE medio publicado por el regulador para los préstamos al consumo con duración inferior a un año, que en el año 2019 era un 2,92%. Con arreglo a este razonamiento, resulta obvio que el interés de las operaciones controvertidas es notablemente superior al normal del dinero.

El informe de AEMIP, no puede reunir los requisitos de imparcialidad que preside la actuación del órgano regulador. Por ello, el Tribunal Supremo insiste en que debe acudirse a las estadísticas oficiales del Banco de España. El objetivo es evitar que el "interés normal del dinero" resulte fijado por la actuación de operadores fuera del control del supervisor que apliquen unos intereses claramente desorbitados, como ocurre en el presente supuesto. Además hay que tener en cuenta que las estadísticas usadas como parámetro de referencia por la Sentencia, son elaboradas por una Asociación privada, cuyos socios o partícipes son entidades similares a la demandada". Aplicando la anterior doctrina al caso de autos, llegamos a la conclusión de que el tipo de interés pactado en el contrato de microcrédito suscrito por las partes es notablemente superior al normal del dinero conforme a las estadísticas oficiales del Banco de España, y como decíamos en la resolución citada, en esas circunstancias, corresponde al prestamista la carga de probar la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen la estipulación de este tipo de interés tan elevado, tal y como han declarado las SSTS núm. 628/2015, de 25 de noviembre Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 991ª, 25-11-2015 (rec. 2341/2013) y 149/2020 de 4 de marzo Jurisprudencia citada STS, Sala de lo Civil, Sección 991ª, 04-03-2020 (rec. 4813/2019). Esta prueba no ha tenido lugar en el caso que nos ocupa. En consecuencia, procede declarar la nulidad del contrato de préstamo por usurario, con las consecuencias previstas en el artículo 3 LRU realizándose la correspondiente liquidación en ejecución de sentencia, sin que proceda entrar a conocer el resto de los motivos de recurso. Nada se ha acreditado por la demandada que justifique la existencia de ninguna concreta circunstancia que justifique la aplicación de un interés tan alto. Siendo que con aplicación de la doctrina jurisprudencial expuesta, ni el que otras mercantiles aplicaran igualmente intereses similares, ni que el riesgo de impago sea alto, son elementos justificadores de un

tipo de interés tan desproporcionado, debiendo concluirse la calificación del contrato como usurario.

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta y los propios razonamientos jurídicos antes esgrimidos, en el presente supuesto no cabe sino concluir el carácter usurario de una TAE que oscila, realmente, entre un 264% y un 987,22%, máxime teniendo presente que el documento núm. 01 del escrito de demanda, presenta un tipo deudor, que denomina como “fijo”, y que va, según refiere el propio contrato, entre un 9% y un 22% mensual, lo que, mediante los más elementales criterios matemáticos, implica un tipo nominal anual que se sitúa entre un 108% y un 264%. Tal porcentaje, en su tipo máximo, coincide con el expresado en el contrato. Sin embargo, tal porcentaje es el relativo al tipo de interés nominal, y no el relativo a la tasa anual equivalente, que, aplicando tales criterios aritméticos, oscilaría hasta un máximo del 987,22%.

De conformidad con lo expuesto, procede la íntegra estimación de la demandada, calificando el contrato como usurario declarando su nulidad en la forma prevista en el fallo de la presente resolución.

CUARTO.- Declarado usurarios los intereses del contrato, esta declaración implica declarar su nulidad que, según el Tribunal Supremo (Sentencia de 14 de julio de 2009) debe ser calificada como “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”. Siendo ello así, resulta de aplicación el artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, el cual dispone lo siguiente: “Declarada con arreglo a esta ley la nulidad de un contrato, el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida; y si hubiere satisfecho parte de aquélla y los intereses vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total de lo percibido, exceda del capital prestado”.

QUINTO.- La estimación de la acción principal hace innecesario entrar en el examen de la acción ejercitada con carácter subsidiario. De conformidad con lo anteriormente expuesto, procede la estimación de la demanda en los términos solicitados, debiendo determinarse el quantum del exceso que ha de restituir la entidad prestamista (si lo hubiere) en ejecución de Sentencia, a la luz de la consolidada doctrina jurisprudencial que, en relación con el artículo 219 LEC y la nulidad de cláusulas incorporadas en condiciones generales, recoge entre otras muchas la SAP de Madrid, sección 28.^a de 20 de diciembre de 2019.

SEXTO.- A las cantidades que en su caso haya de restituir la parte demandada le son de aplicación los artículos 1100 y 1108 CC, devengando intereses legales.

SÉPTIMO.- En materia de costas, cabe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, apartados 1, 2 y 3, que establece lo siguiente:

“1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.

2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.

3. Cuando, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.

Cuando el condenado en costas sea titular del derecho de asistencia jurídica gratuita, éste únicamente estará obligado a pagar las costas causadas en defensa de la parte contraria en los casos expresamente señalados en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.”

Conforme al principio de vencimiento objetivo del artículo 394 de la LEC, las costas de la primera instancia en este proceso declarativo se imponen a la parte demandada, al haber visto rechazadas sus pretensiones, sin que concurran en el presente supuesto serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen un pronunciamiento distinto.

Vistos los artículos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación al presente caso,

FALLO

Que **debo ESTIMAR y ESTIMO íntegramente** la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales D. ^a , en nombre y representación de **D. ^a** , bajo la dirección del Letrado D. Miguel Ángel Correderas García, y dirigida contra la entidad **CREDITO A DOMICILIO, S.L.**, representada procesalmente por la Procuradora de los Tribunales D. ^a y defendida por el Letrado D. .

En consecuencia, **debo DECLARAR y DECLARO la nulidad** del contrato de microcrédito suscrito entre las partes por usura con los efectos del artículo 3 de la Ley de Represión de la Usura, debiendo la entidad demandada devolver al prestatario demandante las cantidades por él abonadas que excedan del capital prestado -si hubiera ese exceso-, más los intereses legales y procesales correspondientes, todo ello con condena en costas a la parte demandada.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos de que dimana, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.